

RESOLUCION N. 01036
“POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

**LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE**

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 01 de 1984, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 modificada por la Resolución No. 046 del 13 de enero de 2022 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que cursa en el sector del Barrio Guadalupe, una la Acción Popular en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Salud y Obras de Distrito Capital, el Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U. y la Alcaldía Local de Kennedy, la cual tiene como objetivo proteger los derechos colectivos de goce a un ambiente sano y al espacio público, entre otros, y la cual, fue decidida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de mayo de 2002, con apelación resuelta por la Sala Quinta del Consejo de Estado, el 26 de julio de 2002.

Que dicho fallo dejo como obligaciones para el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), hoy Secretaría Distrital de Ambiente, adoptar las medidas policías y administrativas pertinentes para evitar que se siga contaminando la ronda hidráulica del río Tunjuelo, y adelantar las acciones pertinentes para limpiar los desechos sólido que se arrojan en dicha norma.

Que en ejercicio de las funciones de control y seguimiento, profesionales de la Oficina de Control de Calidad y Uso del Agua de la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 13 de septiembre de 2007, realizaron visita técnica al establecimiento de comercio denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, con matrícula No. 01306161, propiedad del señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456259, predio ubicado en la Carrera 62B No. 57D – 46 Sur, de la localidad de Kennedy, de esta ciudad.

Que como consecuencia de lo anterior, se emitió el **Concepto Técnico No. 12670 del 09 de Noviembre de 2007**, en donde se registró un presunto incumplimiento en materia de vertimientos, al realizar vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, sin contar con los debidos registro y permiso.

Que así las cosas, la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, acogiendo lo señalado en el concepto técnico mencionado, procede a emitir **Resolución No. 1183 del 6 de marzo de 2009**, por medio de la cual se impone una medida preventiva de suspensión de actividades generadoras de vertimientos industriales al establecimiento comercial denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, con matrícula No. 01306161, propiedad del señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456259, ubicado en la Carrera 62 B No. 57D – 46 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad.

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante edicto con fecha de fijación de fecha 06 de octubre de 2009 y desfijación de fecha 13 de octubre de 2009.

Que mediante **Resolución No. 1184 del 6 de marzo de 2009**, la Secretaría Distrital de Ambiente, resolvió abrir investigación administrativa sancionatoria contra el mencionado propietario y formuló pliego de cargos en los siguientes términos:

*“(…) **ARTÍCULO SEGUNDO:** Formular contra del señor **SILVERIO CASTELLANOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456.259 de Bogotá, en su calidad de propietaria y/o representante legal del establecimiento **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, los siguientes cargos:*

Cargo Primero: *Por presuntamente verter residuos líquidos industriales a la red de alcantarillado sin el correspondiente registro y permiso de vertimientos, infringiendo el artículo 1 de la Resolución No. 1074 de 1997. (...)*”

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante edicto con fecha de fijación de fecha 06 de octubre de 2009 y desfijación de fecha 13 de octubre de 2009, quedando ejecutoriado el día 6 de mayo de 2009 y publicado en el Boletín Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente el 24 de febrero de 2011.

Que profesionales de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo realizaron visita técnica el día 19 de octubre de 2015 al predio de la Carrera 62 B No. 57 D – 44 Sur, de la Localidad de Kennedy, dejando lo evidenciado en el **Concepto Técnico 12606 de 4 de diciembre de 2015**, el cual estableció:

“(…)”

- *Resolver la Resolución No. 1183 del 19/03/2009, Por medio de la cual se impone medida preventiva consistente en suspensión de actividades generadoras de vertimientos. Teniendo en cuenta que el establecimiento comercial denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, actualmente no es objeto del permiso de vertimientos, además porque el establecimiento no realiza actividades en el predio.*

- Resolver la Resolución No. 1184 del 19/03/2009, Por la cual se inicia una investigación sancionatoria del carácter ambiental, se formula un pliego de cargos y se toman otras determinaciones”, Teniendo en cuenta que el establecimiento comercial denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, no realiza actividades en el predio.

- Determine la viabilidad del archivo del Expediente SDA-08-2009-301 perteneciente al establecimiento denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER** y se cree un nuevo expediente, si es pertinente, para los usuarios a los cuales se les está otorgando el Registro de Vertimientos en el presente Concepto Técnico.
(...)”

Que una vez realizada la verificación a través del Registro Único Empresarial y Social -RUES- y de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC-, se logró establecer que la matrícula mercantil No. 639218 del 29 de marzo de 1995, del señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456.259, se encuentra cancelada, desde el día 12 de julio de 2015, sin embargo, la matrícula del establecimiento de comercio en mención se encuentra activa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

Teniendo en cuenta que la situación irregular que dio origen a las presentes diligencias fue iniciada el día 13 de septiembre de 2007, fecha en la que se llevó a cabo visita técnica en las instalaciones del establecimiento de comercio denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, con matrícula No. 01306161, propiedad del señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456259, ubicado en la Carrera 62 B No. 57D – 46 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, donde se pudo verificar que la señor en cita, realizando vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, sin contar con los debidos registro y permiso, pronunciamientos éstos emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, resulta procedente establecer como primera medida, que la normativa aplicable al presente caso es la prevista en el Decreto 1594 de 1984.

Consecuentemente se advierte que los hechos materia de investigación son de naturaleza y de ejecución instantánea, dado que su consumación tuvo lugar en un único momento, claramente determinado en el tiempo, el cual marca el punto de referencia y de partida para el computo del término de caducidad.

A partir de lo expuesto, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso ocurrieron antes

de la entrada en vigor de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

“Artículo 64. Transición de procedimientos. *El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio de la actuación con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

“Artículo 40. *Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

Sin embargo, *los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, **los términos que hubieren comenzado a correr**, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando** se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, **empezaron a correr los términos**, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones”. (...)* (Subrayado y negrillas fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que en el presente caso esta Secretaría conoció del hecho irregular el día **13 de septiembre de 2007**, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en su lugar, regía el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,

se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado antes del 12 de septiembre de 2010, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *“nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente”*, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**.

Frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

"Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.

En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:

“Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...).”

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

“(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)”

Al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa⁶(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que esta Secretaría, disponía de un término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, esto es desde el día **13 de septiembre de 2007**, fecha en la que se llevó a cabo visita técnica en las instalaciones del establecimiento de comercio denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, con matrícula No. 01306161, propiedad del señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456259, ubicado en la Carrera 62 B No. 57D – 46 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, donde se pudo verificar que la señor en cita, realizando vertimientos a la red de alcantarillado público

de la ciudad, sin contar con los debidos registro y permiso; por lo que disponía hasta el **12 de septiembre de 2010**, para la expedición del Acto Administrativo que resolvería de fondo la Actuación Administrativa frente al proceso sancionatorio, trámite que no se surtió, de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

Ahora, respecto a la medida preventiva de suspensión de actividades, impuesta en la **Resolución No. 1183 del 6 de marzo de 2009**, y conforme a lo visto en el presente asunto, dicha resolución, fue emitida en vigencia del Decreto 1594 de 1984, razón por la cual son aplicables las disposiciones de dicha normativa.

En ese orden de ideas, el Decreto 1594 de 1984, en su artículo 186, establece que las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter **preventivo y transitorio** y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Teniendo en cuenta que la medida preventiva fue impuesta en el año 2009, fecha desde la cual han cambiado las circunstancias, por la desaparición de los supuestos que la originaron, y la sustracción del objeto de la medida, es preciso levantar la medida preventiva en referencia.

Por lo tanto, en esta Resolución se procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y en consecuencia ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2009-301**.

Por último, es del caso traer a colación la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, que en su artículo 308, dispone:

“RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo que concluye mediante el presente acto dio inicio en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, se mantendrá dicho procedimiento hasta el final de la presente actuación administrativa.

III. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se transformó el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA–, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que corresponda a quien infrinja dichas normas.

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo Artículo en el literal l), asigna a esta Secretaría la función de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

En virtud del numeral 1° del artículo 2° de la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 modificada por la Resolución No. 046 del 13 de enero de 2022 de la Secretaría Distrital de Ambiente, se delegó a la Dirección de Control Ambiental, entre otras, la función de expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Que, en mérito de lo expuesto, La Dirección de Control Ambiental;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso iniciado por la Secretaría Distrital de Ambiente, en contra del señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456259, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, con matrícula No. 01306161, ubicado en la Carrera 62 B No. 57D – 46 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Levantar definitivamente, la medida preventiva consistente en la suspensión de actividades generadoras de vertimientos, impuesta en el artículo primero de la **Resolución No. 1183 del 6 de marzo de 2009**, al establecimiento **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, con matrícula No. 01306161, propiedad del señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456259, ubicado en la Carrera 62 B No. 57D – 46 sur

de la Localidad de Kennedy de esta ciudad, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. – Notificar el contenido de la presente Resolución al señor **SILVERIO CASTELLANOS LESMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 456259, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **DISTRIBUIDORA DE CARNES SILVER**, con matrícula No. 01306161, en la Carrera 62 B No. 57D – 46 sur de la Localidad de Kennedy de esta ciudad; de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO. – Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Control Disciplinario Interno de esta entidad, para lo de su competencia. Se remitirá en consecuencia copia del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. – Publicar la presente resolución en el Boletín Legal Ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. – Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO. – Ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-301**, como consecuencia de lo previsto en el Artículo Primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO OCTAVO. – Contra la presente resolución procede recurso de reposición el cual se deberá interponer ante la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, dentro de los cinco (05) días subsiguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE





SECRETARÍA DE
AMBIENTE

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

RICARDO EMIRO ALDANA ALVARADO CPS: CONTRATO 2019-0117 DE 2019 FECHA EJECUCION: 04/04/2022

Revisó:

JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN CPS: CONTRATO SDA-CPS-20220344 DE 2022 FECHA EJECUCION: 12/04/2022

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 12/04/2022